

Antecedentes, situación actual y recomendaciones en la tenencia de la tierra en el oriente boliviano	Título
CAO, Cámara Agropecuaria del Oriente - Autor/a;	Autor(es)
Proceso agrario en Bolivia y América Latina	En:
La Paz	Lugar
CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo PLURAL editores	Editorial/Editor
2003	Fecha
	Colección
Pobreza rural; Tenencia de la tierra; Propiedad agraria; Bolivia;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120904113608/06resultados.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



Antecedentes, situación actual y recomendaciones en la tenencia de la tierra en el oriente boliviano

CAO*

Principales causas de la pobreza rural del altiplano y la fragilidad del sector agropecuario del oriente boliviano

Uno de los mayores problemas de nuestro país ha sido la recurrente ausencia de verdaderas políticas de desarrollo económico de largo plazo cuya aplicación esté dirigida en forma específica a la generación de fuentes de trabajo y al mejoramiento del nivel de vida de todos los bolivianos.

Si analizamos los últimos 50 años de vida republicana de nuestro país —el período de aplicación de las mayores reformas legales en materia agraria—, se puede concluir de que durante todo este período, los sucesivos gobiernos de turno han adolecido de una ausencia de verdaderas políticas económicas de desarrollo que tengan como objetivo específico superar las condiciones de extrema pobreza de pobladores de las regiones más deprimidas del país y generar verdaderas alternativas de vida para el trabajador del campo.

La ausencia de políticas de desarrollo del sector rural ha tenido diferentes resultados sobre el productor rural del altiplano y el productor rural del oriente boliviano.

* Cámara Agropecuaria del Oriente, Santa Cruz-Bolivia.

Principales consecuencias sobre el productor rural del altiplano. A pesar de que la región altiplánica tiene importantes rubros de producción que constituyen interesantes alternativas económicas para la región, la ausencia de políticas de fomento a la producción de estos rubros ha coadyuvado al empobrecimiento paulatino de sus habitantes, ocasionando una creciente presión expulsora de población en búsqueda de mejores condiciones de vida. Los destinos de estas personas han sido principalmente las tierras del oriente boliviano y la República Argentina.

La presión sobre las tierras del oriente boliviano, y principalmente del departamento de Santa Cruz, se ha incrementado notablemente los últimos años como consecuencia de la profundización y recrudescimiento de la crisis económica del país.

Principales consecuencias sobre el productor agropecuario del Oriente Boliviano. La ausencia de políticas sostenidas de fomento y apoyo a las actividades agropecuarias del oriente boliviano ha limitado el crecimiento y la fortaleza del sector agropecuario comercial. Las actividades agropecuarias se han desarrollado principalmente en base a iniciativas privadas. Esta situación ha significado el desarrollo de un sector con marcadas limitaciones en su capacidad tecnológica, capacidad financiera y extremadamente vulnerable a las condiciones climáticas y las variaciones de precios. Adicionalmente a estos problemas, en los últimos años se ha sumado también el de la inseguridad jurídica.

En cuanto al desarrollo económico y social de las áreas rurales del departamento de Santa Cruz, es importante destacar que la ausencia de políticas de desarrollo rural por parte del Gobierno Nacional fueron ampliamente compensadas por la acción del Comité de Obras Públicas (COOPP) y posteriormente por la acción de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ). Este proceso de fortalecimiento de la infraestructura social y productiva rural en nuestro departamento concluyó al reformarse la estructura del Poder Ejecutivo y desaparecer CORDECRUZ.

La distribución de tierra como solución política a las condiciones de extrema pobreza en el altiplano

Por lo antes señalado, se puede concluir que uno de los principales responsables de los actuales niveles de pobreza y extrema pobreza rural del altiplano boliviano y el consecuente proceso migratorio a otras áreas del país, en búsqueda de mejores condiciones de vida es, justamente el mismo Estado Nacional que no ha tenido la capacidad suficiente para implementar verdaderas políticas de desarrollo económico y social que ayuden a superar las condiciones de vida del campesino del altiplano

Al no haber solucionado los problemas básicos de la población rural del altiplano y ante las presiones de estos por mejores condiciones de vida, los diferentes gobiernos de turno desviaron esta presión hacia el proceso de distribución de tierras en el oriente boliviano.

Esta situación originó una corriente migratoria continua que provocó la ocupación paulatina de las tierras productivas del oriente. En principio, las áreas ocupadas por estas corrientes migratorias fueron tierras despobladas de alta fertilidad en las provincias Ñuflo de Chávez, Ichilo y Sara (zonas de Brecha Carasarabe, San Julián, Yapacaní, Antofagasta y Huaytú). Al ocuparse totalmente estas áreas, el proceso migratorio continuó de manera espontánea, afectando otras áreas fiscales hasta virtualmente llegar a ocupar la casi totalidad de las mejores tierras disponibles en el oriente boliviano.

Si bien el proceso de ocupación de tierras (colonización) fue realizado principalmente a través del Instituto Nacional de Colonización (INC), es importante destacar también la importancia cuantitativa de los “asentamientos espontáneos” producidos en todo el departamento.

Inicio de los conflictos en materia agraria: agotamiento de las áreas fiscales disponibles

Los problemas en materia de tenencia de la tierra comenzaron a notarse con mayor claridad al agotarse las mejores tierras fiscales disponibles. El agotamiento de las tierras fiscales con mayor aptitud agrícola fue el resultado natural de un proceso de ocupación continuo por parte de una corriente migratoria ininterrumpida, sumada a un proceso de consolidación y expansión de una economía comercial, cuyos principios de producción son regidos por una economía de mercado.

Inseguridad jurídica: causas y consecuencias

La promulgación de la Ley 1715 (Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA) tuvo como principal propósito regularizar la tenencia de la tierra en todo el territorio nacional, a objeto de otorgar seguridad jurídica a todos los propietarios y poseedores de tierra, indistintamente de que sus predios fuesen pequeños, medianos o grandes, o que sus actividades productivas estén destinadas al autoconsumo, la producción comercial, forestal, de conservación u otras de uso sostenible.

Desafortunadamente para el sector agropecuario, la aplicación de la Ley 1715 y el inicio del proceso de saneamiento derivó más bien en una inesperada y creciente inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica del proceso de saneamiento se inició antes del inicio a la aplicación de la Ley 1715, profundizándose aún más en forma posterior, por la distorsión sufrida a causa de la promulgación de los siguientes instrumentos normativos:

- Promulgación de Decretos Supremos Reglamentarios con un alto sesgo en contra de los intereses del sector agropecuario.

- Profundización de estos sesgos y distorsiones a través de la promulgación de Decretos Supremos elaborados al calor de presiones políticas.
- Emisión de Resoluciones Administrativas, guías de aplicación, normas y otras disposiciones legales, con criterios altamente lesivos a las condiciones de producción del sector agropecuario, con el específico propósito de establecer una base legal que, además de permitir, también “legalice” el recorte de las propiedades.

La elaboración de esta telaraña jurídica normativa se constituyó en la principal herramienta utilizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para el inicio de un proceso de saneamiento cuyo objetivo específico parecería más bien ser el recorte de las propiedades agropecuarias, antes que la regularización de los derechos propietarios.

Las principales consecuencias de la aplicación del proceso de saneamiento, con este marco jurídico normativo, han sido entre otras, las siguientes:

- Excesivos e injustificados recortes de propiedades rurales.
- Inseguridad en los derechos de propiedad.
- Pérdida de inversiones productivas en predios que han sido sujetos a procesos de desalojo.
- Imposibilidad de acceder a créditos bancarios con garantías hipotecarias de inmuebles rurales.
- Encarecimiento de los servicios financieros para el productor en las fuentes de crédito a las que éste pueda acceder.
- Depreciación del valor de los predios rurales.
- Reducción de las inversiones.
- Ahuyentamiento de potenciales inversionistas nacionales o extranjeros, que ha implicado a su vez, ahuyentar el ingreso de capitales de producción.
- Paralización de la producción en predios que tienen cuestionado su derecho propietario.

Restitución del Estado de derecho e inicio de un proceso de distribución de tierras que solucione la inseguridad jurídica agraria y la pobreza rural

Con el propósito de comenzar a solucionar los problemas de inseguridad jurídica y aplicar una verdadera política agraria que dé solución real y definitiva a los problemas de pobreza y extrema pobreza del campesino boliviano (del oriente y occidente), es imprescindible que el Gobierno Nacional deje de utilizar políticamente el tema agrario y se preocupe más bien en aplicar políticas responsables, aunque estas no tengan un elevado rédito político. En la región del oriente boliviano, la aplicación de estas políticas deben estar dirigidas de manera principal (y no excluyente), a tres grandes grupos:

- La propiedad agraria comercial, con formas de producción empresarial y extensiva.
- La propiedad agraria recolectora-extractora del norte amazónico boliviano.
- La pequeña propiedad agraria destinada a los cultivos de subsistencia y la generación de excedentes para el mercado.

La propiedad agraria comercial. Considerando que los principales problemas de este sector son los de inseguridad jurídica, la política del Gobierno debe estar dirigida a la solución de los problemas de inseguridad, generados por un marco normativo sesgado y altamente lesivo para el sector.

La propiedad agraria recolectora-extractora. El caso de este tipo de propiedad es peor que el de la propiedad agraria comercial, por cuanto ésta no tiene siquiera un marco jurídico normativo que tome en cuenta las características propias de la actividad recolectora-extractiva y, menos aún, que considere el proceso histórico de formación este tipo de actividad económica. En consecuencia, es urgente el establecimiento de un marco jurídico normativo que considere estos y otros aspectos propios de las actividades económicas y comerciales específicas del norte amazónico boliviano.

La pequeña propiedad agraria. El caso de la pequeña propiedad agraria y del pequeño productor agropecuario es el que ha tenido hasta el presente la peor atención por parte de los gobiernos de turno. Este sector social ha sido atendido únicamente con procesos de distribución de tierras, pero esta distribución no ha estado acompañada de programas de asistencia técnica, crediticia, ni de ningún tipo de infraestructura básica de apoyo, como caminos, agua potable, escuelas, postas sanitarias, etcétera.

En este último caso, consideramos de urgente necesidad que el Gobierno Nacional implemente verdaderas políticas agrarias para este sector, con la ejecución de Programas de Asentamientos Humanos que además de la distribución de tierras fiscales, incluyan infraestructura básica consistente en caminos, escuelas y postas sanitarias mínimamente equipadas.

Desde el punto de vista económico, y con el propósito de asegurar la viabilidad de estos asentamientos, los Programas mencionados deben incluir asistencia técnica, créditos de producción y el acceso a la tecnología de producción que asegure la competitividad económica de los productores y su inserción real en el aparato productivo nacional. De esta manera se logrará incorporarlos efectivamente en la economía de mercado del país.